



DIVISIÓN JURÍDICA

RESOLUCIÓN EXENTA N°
SANTIAGO,

299
1 de marzo del 2021

Visado Por:
/milabaca/

**DENIEGA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN N°
AH007T0007562, CONFORME A LA LEY DE TRANSPARENCIA.**

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 17.374, de 1970, que fija nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del D.F.L. N° 313, de 1960, que aprueba la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de Estadísticas; en el Decreto N° 1.062, de 1970, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba Reglamento del Instituto Nacional de Estadísticas; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el artículo primero de la Ley N° 20.285, que aprueba la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante la “Ley de Transparencia” y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en resolución exenta N° 2.979, de 2019, del INE; en solicitud GESDOC **SDJ_DivisionJuridica_000004070001**, de 12.02.2021, de la Unidad de Transparencia INE; en lo establecido en la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y en la demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 10 de la Ley de Transparencia, citada en el Visto, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece dicha Ley y, además, prevé que el acceso a la información comprende el derecho de acceder a la información contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.

2. Que, el artículo 14 de la referida Ley, dispone que el Jefe Superior del Servicio debe pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud. En este contexto, el Reglamento de la Ley de Transparencia, singularizado en el Visto del presente acto administrativo, dispone que, en caso que el órgano o servicio requerido deniegue la solicitud de información solicitada en virtud de alguna de las causales de secreto o reserva previstas en la Ley, deberá hacerlo por escrito, por el medio que corresponda y de manera fundada.

3. Que, con fecha 1 de febrero de 2021, a través de solicitud N° **AH007T0007562**, don JIMMY CONSTANTINO JIMENEZ ha presentado requerimiento de acceso a la información, solicitando lo siguiente:

“[...]Necesito tener acceso a datos del "Censo Nacional de población y vivienda 2017" que no encuentro en internet. La información requerida es tener la información desagregada por el código de manzana censal (ID_MANZENT) del 2017 (formato de 16 regiones) de los años de escolaridad de los censados de manera agregada por año de escolaridad. Ejemplo, número de personas de cada manzana que tienen 1 año de escolaridad, 2 años de escolaridad, 3 años de escolaridad, así hasta el máximo de años de escolaridad (Variable "escolaridad" del censo). Así como también el número de personas por cada manzana censal según su nivel educacional (Variable "P_15" del censo). La información la necesito para todas las manzanas/entidades de todo el país, respetando la indeterminación en aquellas manzanas que sea necesaria para mantener el secreto estadístico. La información la requiero de preferencia en formato Excel o CSV. [...]”

4. Que, el INE es el encargado de las estadísticas y censos oficiales de la República, por tanto, debe efectuar el proceso de recopilación, elaboración técnica, análisis y publicación

de las estadísticas oficiales y, entre otras atribuciones, le corresponde confeccionar un registro de las personas naturales o jurídicas que constituyen “Fuente de Información Estadística”.

5. Que, el INE, como servicio de información pública que es, entrega sus productos estadísticos de una manera única y universal, esto es, para todos los ciudadanos en un mismo momento, el que se encuentra determinado con anterioridad a través del Plan Nacional de Recopilación Estadística del año respectivo; tratándose de ciertos productos de periodicidad mensual el INE incluso divulga su publicidad con el día y hora prefijada. Por esta razón, se podría afirmar que el Instituto tiene reglas propias y especiales en materia de publicidad de la información.

6. Dependiendo del diseño muestral y su representatividad, son liberados de manera activa o pasiva las bases de datos en consideración a criterios estrictamente profesionales, incluidos criterios científicos y métodos y procedimientos propios de esta ciencia, **a un nivel en que los profesionales estadísticos que han desarrollado el levantamiento estimen que se han minimizado los riesgos de vulneración del secreto estadístico que protege la identidad del informante.**

En este sentido, se debe aclarar que los pasos o eslabones del “procedimiento estadístico” sólo podrían en un sentido figurado asimilarse a un “proceso administrativo”, pero lo cierto es que las etapas sucesivas del procedimiento estadístico están constituidos por una serie de técnicas (estadísticas) y no de otra naturaleza, lo que permite afirmar que -en la práctica- esta asimilación es imposible, no es un auténtico procedimiento administrativo por tratarse más bien de una actividad material que de una actividad jurídica. Por esta razón, el producto estadístico puede estar divulgado, así como sus metodologías y pasos previos, pero eso no significa que las bases de datos en virtud de las cuales se generaron esos datos estadísticos sigan la misma suerte, por el contrario, es infranqueable. Estos datos provistos por los informantes están protegidos por una barrera llamada “Secreto Estadístico”.

7. Así, en el ejercicio de estas funciones el INE, los organismos fiscales, semifiscales y empresas del Estado y cada uno de sus respectivos funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieran a personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades. El estricto mantenimiento de estas reservas constituye el “Secreto Estadístico”. Su infracción por cualquier persona sujeta a esta obligación, hará incurrir en el delito previsto y penado por el artículo 247, del Código Penal, debiendo en todo caso aplicarse pena corporal” (Artículo 29°). Recordar que el artículo en referencia establece un tipo penal de mera actividad de divulgación de la información, a diferencia del tipo penal descrito en el Código que exige un resultado, esto es, un perjuicio al particular cuya información ha sido revelada por el funcionario público.

8. Esta forma de conducirse en el ejercicio de sus funciones que configura el secreto estadístico, es diferente a otras reglas de confidencialidad o reserva que existen en el ordenamiento jurídico chileno ya que, para el caso del INE, no admite excepciones administrativas ni judiciales (como sí lo hacen otras normas v.g. reserva sobre información tributaria, reserva del Banco Central, etc.), pues justamente la oferta de secreto que se ofrece al informante es total, absoluta. Esta oferta de secreto sobre la información recabada es la que permite que el INE realice su cometido.

Lo anterior tiene una justificación muy razonable y es que la actividad del INE abarca una amplia dimensión de la vida de las personas, así como de las empresas, por ejemplo, a través de las encuestas de hogares se recaba información personal y sensible de sus integrantes, sus hábitos de consumo y orientación sexual y en el caso de las encuestas de empresas, sobre sus ingresos y gastos, entre otras materias.

Ahora bien, teniendo claro que el INE es probablemente el mayor tenedor de datos de las personas naturales y jurídicas en el Estado, se hace necesario aclarar que la información que ingresa al INE no es, ni se transforma en pública por ese sólo hecho: lo que es público es el resultado estadístico del tratamiento de esos datos. **Esto incluye eventualmente la base de datos a un nivel de innominación e indeterminación aceptable**, por lo que conviene reiterar que la protección especial que brinda el Secreto Estadístico es justamente para los informantes, no para la actividad del INE, la que queda completamente a merced de las normas generales de transparencia de la Ley N° 20.285

El secreto permite que los informantes entreguen libremente información que de otra manera jamás revelarían. Si el Estado, a través del INE, no pudiera acceder a esa información probablemente la estadística carecería de representatividad y sus resultados no darían confianza y es justamente la confianza que el secreto ofrece, la que permite que los informantes entreguen información de calidad de todo aquello que se les consulta.

9. Que, por otro lado, la incorporación de Chile a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aumenta aún más la necesidad de asegurar la protección de datos personales, en tanto se vuelve una exigencia de este organismo a sus países miembros, a partir del

establecimiento de directrices generales sobre la privacidad de datos personales.

10. Por ello, para realizar la indeterminación como procedimiento se revisó experiencia internacional, con el fin de tener una mirada general del panorama en torno a la protección de los datos de la población de los censos en otros países. En estas experiencias se constataron altas restricciones en torno a la protección de los datos, realizadas de diferentes maneras, siendo los principales métodos de indeterminación el intercambio de datos, la recodificación de variables y categorías, la restricción del nivel de información geográfica, la entrega de valores determinables como “no disponibles”, el redondeo de datos con límites máximos y mínimos, la entrega solo de muestras de la población y el intercambio aleatorio para muestras pequeñas de hogares similares en áreas cercanas, entre otros.

11. Que en este sentido es necesario precisar una de las causales que hacen procedente la denegación parcial de la información corresponde a la **Causal del numeral 5 del artículo N° 21 de la Ley de Transparencia: reserva o secreto.**

“Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política.”

A fin de explicar la procedencia de esta causal es preciso tener presente que, si bien la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadísticas no tiene el rango de orgánica constitucional (como lo dispone el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República), es la misma carta fundamental la que le otorga ese carácter, conforme más adelante se indicará. El inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República señala: *“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.”*

Por su parte, la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República prescribe que *“Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales.”*

En relación a lo precedentemente expuesto y a las normas citadas, cabe concluir que el Instituto Nacional de Estadísticas, se encuentra obligado a respetar las normas establecidas por la Ley N° 17.374, dentro de las cuales se contempla la estricta observancia del Secreto Estadístico, consagrado en los artículos 29° y 30° de la citada Ley N° 17.374, de 1970.

En el mismo sentido, el INE se encuentra también sujeto en su actuar a los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales¹, los cuales son aplicados en nuestro país en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, que constituyen los criterios inspiradores de los códigos de buenas prácticas internacionales y por ende, revisten el carácter de normas y directrices internacionales. Concretamente, en el caso en análisis, son de principal relevancia los siguientes principios:

*“Principio 1: Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática y proporcionan al gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. **Con este fin, los organismos oficiales de estadística han de compilar y facilitar en forma imparcial estadísticas oficiales de comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información pública.**”*

Principio 4. Los organismos de estadística tienen derecho a formular observaciones sobre interpretaciones erróneas y la utilización indebida de las estadísticas.

*Principio 6: **Los datos que reúnan los organismos de estadística para la compilación estadística, ya sea que se refieran a personas naturales o jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales y utilizarse exclusivamente para fines estadísticos.**” (el destacado es nuestro)*

¹ NACIONES UNIDAS. Consejo Económico y Social. Aplicación de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. Resolución aprobada por la Asamblea General el 29 de enero de 2014. <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/261>

En este contexto, el ejercicio de las funciones públicas entregadas al INE debe efectuarse con estricta sujeción a las normas y principios que las regulan y, por ende, cualquier acción ejecutada fuera de este ámbito vulneraría los principios de legalidad y competencia, consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, cuyo texto señala:

*“Artículo 6°: Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.
Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.
La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.”*

*“Artículo 7°: Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.
Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.
Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.”*

En este mismo sentido, cumple citar lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone: *“Artículo 2°: Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.”*

Se funda entonces la causal del numeral 5 del artículo N° 21 de la Ley de Transparencia, en el hecho que el INE, conforme lo establece el inciso 1° del artículo N° 29 de su Ley Orgánica N° 17.374: *“[...] no podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades. El estricto mantenimiento de estas reservas constituye el ‘Secreto Estadístico’”.*

Para proteger el secreto estadístico y resguardar la confidencialidad, la entrega de la base de datos de la información censal recopilada y procesada debe realizarse de tal forma que los datos estadísticos tengan la cualidad de ser innominados e indeterminados, para que no sea posible identificar la fuente de la información a partir de ellos, procurando así resguardar debidamente el secreto estadístico contemplado en la ley. En lo específico, este fue el Subdepartamento de Censos de Población el que, en conjunto con la estructura operativa, administrativa y técnica aprobada, se encargó de llevar a cabo el diseño, planificación, levantamiento, análisis y entrega de resultados del Censo de Población y Vivienda 2017, siguiendo los procedimientos de indeterminación y nominación de la base de datos de acuerdo a lo establecido en el artículo 29° de la Ley N° 17.374 sobre el alcance del secreto estadístico. Por la razón anterior, el Instituto Nacional de Estadísticas determinó que la Base de Datos del Censo 2017 se entregaría hasta el nivel geográfico de zona-localidad a nivel de microdatos.

Para la indeterminación de las variables en la Base de Datos del Censo 2017 se definieron los siguientes criterios:

a) Innominación: se eliminó la dirección de la vivienda censada (nombre de calle o camino, número domiciliario, número o letra de block, torre u otro, piso, y número o letra de casa, pieza o departamento) y los nombres de las personas censadas.

b) Agrupación de categorías dentro de variables. en determinadas variables se agruparon algunas categorías de respuesta que podrían permitir identificar a personas específicas. Las variables que presentan agrupación por indeterminación son:

- **Edad (P09):** se agruparon las edades 100 años o más en una única categoría.
- **País de residencia (P10PAIS, P11PAIS, P12PAIS):** se agruparon los países que a nivel país tienen muy poca presencia. El criterio utilizado fue la frecuencia en país de origen (P12PAIS), agrupando países con menos de 100 personas a nivel nacional. La agrupación se realizó de acuerdo a continente. En el caso del continente americano, esta se realizó a partir de sus regiones. Para ver el detalle de países que se agruparon en cada continente, ver anexo N° 2 del Manual del Usuario de la Base de Datos del Censo de Población y Vivienda 2017, disponible en página web del INE².
- **Año de llegada (P12A_LLEGADA):** se muestra desde 1950 hasta 2017, donde 1950 incluye los años declarados anteriores a este, siendo considerado como “1950 o antes”.
- **Pueblos originarios (P16A_OTRO):** se agruparon los pueblos presentes en el territorio nacional con muy poca presencia. El criterio utilizado fue agrupar las categorías con menos de 100

² Link de acceso http://www.censo2017.cl/microdatos/descargas/microdatos/Manual_de_usuario_Censo_2017_16R.pdf

casos a nivel nacional. En este sentido se agruparon los pueblos Ranqueles, Puelches, Batos, Molles y Lollleo dentro del código 37 "Otros pueblos presentes en el territorio nacional".

Luego, los datos del Censo 2017 disponibilizados en la página web institucional, link de acceso: <https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/censos-de-poblacion-y-vivienda/poblacion-y-vivienda>, está a nivel de zona censal urbana o localidad rural. Que son áreas de mayor agregación que la manzana pero que tienen en promedio menos de 2000 viviendas. De forma complementaria, datos con apertura de manzana sólo se publican como indicadores o agregados. Por razones de indeterminación en esas publicaciones se omiten datos específicos cuando la cantidad de personas correspondientes a una categoría es muy pequeña y permiten mantener información de celdas, omitiendo información por debajo del 50% de las celdas.

A modo ejemplar, si liberamos un dato que dice que en la región de Aysén hay 7 hombres de 95 años, a primera vista parece que no hubiera problema en entregar dicha información, pero si una vez concluido el procesamiento se observa que solo uno de esos 7 hombres pertenece a un pueblo originario entonces ahí la base de datos deja de ser completamente anónima, pues estando innominada, existe un mayor nivel de riesgo que esté determinada por esa variable étnica que permitiría reconocer e identificar fácilmente al informante. Esta situación vulnera el secreto estadístico, el que debe ser protegido por la actividad estadística y entendido como una dimensión de la privacidad de las personas, pues hace única a esa persona en un área geográfica determinada.

Por lo tanto, a nivel de manzana en muchos casos la cantidad de personas en una categoría caería en la zona en que se omite el dato. Bajo ese principio, no es posible entregar información con el nivel de desagregación que pide la usuaria, sin omitir el valor de más del 50% de las celdas, con lo cual no se cumpliría el criterio definido para anonimizar el censo.

Es por lo anterior que, para cautelar la individualización de nuestros informantes es que se nos hace imposible remitir un archivo que contenga las variables requeridas, con mayor nivel de desagregación que el publicado en la página.

12. Dicho lo anterior, corresponde además denegar la solicitud de acceso a la información individualizada en el considerando 3, por aplicación, además, de la causal **del numeral 1 del artículo N° 21 de la Ley de Transparencia**, esto es: Afectación al debido cumplimiento de las funciones del Instituto Nacional de Estadísticas.

Según ya hemos señalado, el Instituto Nacional de Estadísticas debe ceñir su actuar a los principios de legalidad y competencia, consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República. Asimismo, sus competencias están definidas en la Ley N° 17.374, que fija el texto refundido, coordinado y actualizado del DFL N° 313, de 1960, que aprueba la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censo y crea el Instituto Nacional de Estadísticas. De conformidad a esta normativa le corresponde al Instituto Nacional de Estadísticas, entre otras funciones específicas, las de:

"Artículo 2°:

a) Efectuar el proceso de recopilación, elaboración técnica, análisis y publicación de las estadísticas oficiales [...]

l) Confeccionar un registro de las personas naturales o jurídicas que constituyan fuente de información estadística".

Asimismo, dicha ley consagra el ya mencionado Secreto Estadístico, razón por la cual el Instituto Nacional de Estadísticas estaría excediendo su ámbito de competencia legal si entregara la información solicitada. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Estadísticas solamente está mandatado por la ley para entregar y dar a conocer estadísticas y datos oficiales, que no vulneren el Secreto Estadístico.

Por otra parte, debemos considerar que en un escenario como el expuesto en el párrafo anterior, las consecuencias de la divulgación de información, generan un daño para la Administración, daño que cruza la vulneración de las diversas jerarquías normativas que conforman el ordenamiento jurídico nacional.

- En el ámbito constitucional, se vulnerarían – como ya se ha indicado – los principios de legalidad y competencia previstos en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental; así como garantías fundamentales previstas en el artículo 19 de la misma, especialmente la igualdad ante la ley, el respeto y protección a la vida privada y a la honra, etc. Todo lo anterior importa, en definitiva, vulnerar las bases de la institucionalidad, el principio de promoción del Bien Común y de servicio del Estado a la persona. Cumple indicar que, la vulneración de estas garantías abre un riesgo de judicialización por eventuales reclamaciones de los informantes que estimaren vulnerados sus derechos constitucionales, a través de las acciones constitucionales previstas al efecto.

- En el ámbito legal, se vulnera no sólo el Secreto Estadístico, y consecuentemente con ello se incurre por parte de quienes concretaron los actos destinados a la entrega de información, en el tipo penal previsto y sancionado en el artículo 247 del Código Penal; sino que además se vulneran las normas que regulan el actuar de la administración en el ejercicio de la función pública contenidas en la Ley N° 18.575, tales como los principios de legalidad, competencia y –muy especialmente- abre un espectro de riesgo asociado al principio de responsabilidad establecido en el artículo 4° de la norma en comento, que establece: *“Artículo 4°: El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones...”*

Asimismo, las competencias del Instituto Nacional de Estadísticas están definidas en la Ley N° 17.374, que fija el texto refundido, coordinando y actualizado del DFL N° 313, de 1960, que aprueba la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censo y crea el Instituto Nacional de Estadísticas. De conformidad a esta normativa, se dispone en su artículo 14, que: *“Corresponderá al Director determinar la estructura interna del Instituto, para lo cual podrá crear, modificar o suprimir dentro del Instituto todas las unidades de trabajo que estime convenientes determinando sus funciones y líneas de dependencia. Asimismo, distribuirá al personal entre dichas divisiones administrativas, de acuerdo a las necesidades del Servicio”.*

Luego, habiendo recibido su requerimiento, éste fue derivado al Subdepartamento de Censos de Población, del Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales, dependiente de la Subdirección Técnica del Instituto Nacional de Estadísticas, por tratarse de la unidad competente para dar respuesta a esta solicitud.

Dentro de las funciones habituales del Subdepartamento de Censos de Población, de acuerdo a lo establecido en Resolución Exenta N° 1753, del 03.06.2019 del Instituto Nacional de Estadísticas, que establece su estructura orgánica, encontramos –entre otras- las siguientes:

- Planificar el proceso de producción estadística correspondiente a los Censos de población.
- Ejecutar los procesos de diseño, procesamiento, análisis y difusión de resultados del proceso de producción de estadísticas de Censos de población usando e incorporando uno o más métodos de recolección de información.
- Resguardar la incorporación de las mejores prácticas nacionales e internacionales en las diferentes etapas del proceso productivo del Censo de población.
- Realizar análisis de pertinencia y factibilidad de nuevas áreas de estudios para evaluar la incorporación de nuevos estudios o temáticas a desarrollar de acuerdo a las prioridades institucionales y de necesidades país.

Tal como señalamos, este fue el Departamento que, en conjunto con la estructura operativa, administrativa y técnica aprobada, se encargó de llevar a cabo el diseño, planificación, levantamiento, análisis y entrega de resultados del Censo de Población y Vivienda 2017, siguiendo los procedimientos de indeterminación y nominación de la base de datos de acuerdo a lo establecido en el artículo 29° de la Ley N° 17.374. Teniendo en consideración nuestra normativa, sus alcances, y los límites para la entrega de información (innominada e indeterminada), el Instituto Nacional de Estadísticas determinó que la Base de Datos del Censo 2017 se entregaría hasta el nivel geográfico de zona-localidad a nivel de microdatos.

Luego, cuando se publicaron los resultados del Censo y sus bases de datos, considerando que hay usuarios que requieren disponer de la información a niveles geográficos menores que zona-localidad, se puso a disposición una base de datos de manzana-entidad con datos agregados, que contiene para cada manzana o entidad las siguientes variables a nivel de personas:

- Número total de personas efectivamente censadas
- Total de hombres efectivamente censados
- Total de mujeres efectivamente censados
- Total de personas de 0 a 5 años
- Total de personas de 15 a 64 años
- Total de personas de 65 y más
- Total de personas migrantes
- Total de personas que se consideran pertenecientes a un pueblo indígena u originario

Para proteger el secreto estadístico y resguardar la confidencialidad, tal como se menciona en el capítulo IV del Manual de Usuarios de la Base de Datos del Censo 2017 disponible en: <https://redatam-ine.ine.cl/manuales/Manual-Usuario.pdf>; a esta base se le aplicó un procedimiento de indeterminación en los casos en que se identificaron tres o menos personas por manzana o entidad con las características especificadas en las variables. Estos datos fueron marcados con asterisco, junto con otras celdas en posiciones clave de manera de no poder obtener el dato indeterminado a partir de procedimientos aritméticos con los totales por manzana o entidad.

En este marco, se analizó el requerimiento de información del usuario de la solicitud, y la conclusión es que no es posible hacer entrega de la información con la desagregación que se solicita, ya que actualmente sólo se dispone

de las bases de datos disponibles para los usuarios con las variables anteriormente mencionadas. Por lo tanto, esta solicitud requeriría trabajo adicional con un alto costo de procesamiento de lo requerido en términos de hora persona, para poder cumplir con la desagregación de la pregunta referida, con el distingo de cada alternativa de respuesta a nivel de manzana/localidad.

Actualmente el equipo del Subdepartamento de Censos de Población se encuentra en proceso de planificación, diseño y construcción del próximo censo de población y vivienda a ejecutarse en el año 2023. En este marco, dentro del Subdepartamento existe una unidad a cargo del procesamiento compuesto por 3 personas. Este equipo se encuentra trabajando en la planificación de las pruebas piloto y en el diseño del procesamiento para el censo, considerando que se realizará un cambio de metodología y de utilización de tecnologías para llevarlo a cabo, que conllevan desafíos importantes para el procesamiento.

Dentro de las funciones del equipo, se encuentra también el dar respuesta a las solicitudes de información relacionadas con los censos pasados. Solo la unidad de procesamiento (3 personas) puede procesar la base de datos del Censo 2017 por protocolos de calidad y seguridad.

Para responder el requerimiento del usuario en lo que concierne a la entrega de información desagregada a nivel de manzana, se requeriría la dedicación exclusiva de 1 funcionario por 20 días hábiles, lo que suma un total de 180 horas de trabajo, derivando en una disminución considerable de la capacidad laboral de la unidad responsable de las tareas de procesamiento del Subdepartamento en un 33% dado el número de profesionales que conforman el equipo actualmente y perjudicando de esta manera la realización de las funciones habituales de la unidad y las otras solicitudes de requerimiento de información que día a día ingresan a este Subdepartamento; sumado a que durante el periodo considerado para contestar la solicitud, uno de los funcionarios se encuentra haciendo uso de feriado legal por 10 días.

El trabajo adicional que se requiere realizar es el siguiente:

- a) Generar los tabulados específicos para todas las manzanas del país considerando los siguientes criterios:
 - Total de personas por años de escolaridad (de 0 a 21 años de escolaridad)
 - Total de personas por nivel educacional. Si lo que se requiere es conocer el nivel más alto aprobado por la persona se debe:
 - Realizar un tabulado por el nivel del curso más alto aprobado
 - Filtrar por la variable completó el nivel especificado, lo que permite diferenciar a quienes finalizaron ese nivel de quienes no lo terminaron.
- b) Luego, para que esta información sea entregable, se debe realizar nuevamente el proceso de indeterminación, el cual consiste en:
 - mantener los campos indeterminados en la base pública de acuerdo a los criterios ya definidos (3 o menos personas por manzana o entidad)
 - generar nuevos campos indeterminados según el proceso de iteraciones básicas
 - identificar el árbol de decisión de posibilidades de determinación adicionales con los nuevos grupos
 - y finalmente, programar y procesar la información.
- c) Por último, realizar una comparación con la base de datos de manzana-entidad publicada, con la finalidad de asegurar que no existan posibilidades de determinar nuevos casos a los ya publicados.

En síntesis, para dar respuesta a todos los puntos objeto de este considerando, se requeriría de un total de al menos 20 días hábiles, plazo similar al límite legal para contestar esta solicitud, implicando 100% del tiempo disponible en dicho periodo, lo cual es inviable debido a los desafíos actuales del Departamento de Demografía y Censos, disminuyendo, de esta forma, en un 33% la capacidad funcionaria del Subdepartamento a cargo de dar respuesta al requerimiento.

En efecto y conforme los antecedentes expuestos, en la medida que la información de su solicitud requiere de los tiempos y cantidad de funcionarios indicados en los párrafos anteriores, considerando el personal disponible para el ejercicio de las funciones del departamento, y la carga laboral del mismo, la prestación o distracción del nivel de atención de las funciones que les son propias implicaría la afectación del debido cumplimiento de las funciones del Subdepartamento de Censo de población, descritas anteriormente y las funciones habituales de sus distintas unidades.

13. Atendido lo precedentemente expuesto, el Instituto Nacional de Estadísticas considera procedente denegar la solicitud presentada por don **JAIME CONSTANZO LOYOLA**, en aplicación de la causal de reserva legal contemplada en el artículo 21 N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación a lo preceptuado en el artículo 29 de la Ley N° 17.374.

RESUELVO:

1° DENIÉGASE la solicitud de acceso a información pública **Nº AH007T0007562**, de fecha 1 de febrero de 2021, de conformidad al artículo 21 N° 1 y 5 de la Ley de Transparencia, según se expresó en las consideraciones precedentes.

2° NOTIFÍQUESE, la presente resolución a la dirección de correo electrónico indicada por el peticionario en la solicitud, adjuntándosele copia íntegra de la misma, conforme con lo dispuesto en el artículo N° 12 de Ley de Transparencia y N° 37 del Decreto Supremo Nº 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, habida cuenta que expresó en la solicitud su voluntad de notificarse mediante comunicación electrónica, de todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administrativo de acceso a la información.

3° En conformidad con los artículos N° 24 y siguientes de la Ley de Transparencia, el solicitante tiene el derecho a recurrir ante el Consejo para la Transparencia, dentro del plazo de quince (15) días contados desde la notificación del presente acto administrativo.

4° INCORPÓRASE la presente Resolución Exenta denegatoria, en el Índice de Actos y Documentos calificados como secretos o reservados del Instituto Nacional de Estadísticas.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

MARÍA GABRIELA ILABACA TOLEDO
Jefa División Jurídica
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
"Por orden del Director Nacional"
(Resolución Exenta N° 2.979, de 05.09.2019)

YBH

Distribución:

-

- Unidad de Transparencia y Atención Ciudadana, INE
- División Jurídica, INE
- Subdepartamento Partes y Registros, INE